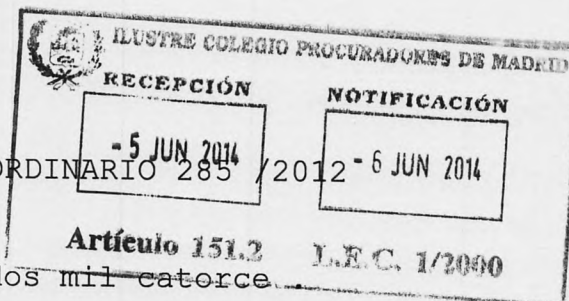




**JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 45  
MADRID**

**SENTENCIA:** 0090/14

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 285 /2012 - 6 JUN 2014



En MADRID a dos de junio de dos mil catorce.

El Ilmo. Sr. D. MARTA FERNANDEZ PEREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia nº 45 de MADRID, habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al número 285/2012 a instancia de D/ña PEDRO LEBLIC AMOROS, representado por el/la Procurador/a D/Dª Berta Rodríguez contra D/ña. IGNACIO ARSUGA RATO y HAZTE OIR representado por el/la Procurador/a D/Dª Cristina Méndez, D/ña. JAIME URCELAY ALONSO y PROFESIONALES POR LA ETICA representado por el/la Procurador/a D/Dª Virginia Gutiérrez, D/ña. LIBERTO SENDEROS OLIVA representado por el/la Procurador/a D/Dª Ana Rayón, D/ña. EDUARDO HERTFELDER DE ALDECOA representado por el/la Procurador/a D/Dª Luisa Bermejo, D/ña. LEONOR TAMAYO y ASOCIACION DE MONTAÑA A CONTRACORRIENTE representado por el/la Procurador/a D/Dª Javier Álvarez, ORGANIZACION DEL BIEN COMUN representado por el/la Procurador/a D/Dª Eduardo de la Torre e INSTITUTO DE POLITICA FAMILIAR, representado por el/la Procurador/a D/Dª Javier Álvarez, que versa sobre declaración de pertenencia a organización secreta, de vinculación a la misma y de disolución de sociedad secreta y asociaciones.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero:** La meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia estimando íntegramente la demanda.

**Segundo:** Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de las partes demandadas, para que en el término legal, comparecieran en autos asistidas de Abogado y Procurador, y contestaran a aquella, lo cual verificaron en forma, formulando hechos, fundamentos de derecho y la súplica de que en su día se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de las costas a la parte actora.

**Tercero:** Convocadas las partes a la audiencia previa, asistieron legalmente representadas, no lográndose acuerdo, ratificándose en sus respectivos escritos, solicitando el recibimiento de pleito a prueba, proponiendo las que estimaron oportunas, y previa declaración de pertinencia se señaló vista para el día 29 de Abril de 2014.

**Cuarto:** El desarrollo de la misma tuvo lugar en la mencionada fecha y en su curso se llevaron a la práctica las pruebas admitidas y que pudieron practicarse en dicho acto, con el resultado que consta en el acta que antecede, y tras formular las partes oralmente sus respectivas conclusiones, quedaron los Autos conclusos para dictar sentencia, sin más trámite, habiéndose registrado la Vista en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, conforme a lo dispuesto en el art. 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de Enero de 2000.

**Quinto:** Que en la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto en autos.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** Antes de entrar a conocer sobre la pretensión contenida en la demanda deducida por la defensa de Don Pedro Leblic Amoros, en defensa de la protección del derecho fundamental que prohíbe las sociedades secretas y paramilitares - dirigida a que se dicte sentencia declarando:

- La pertenencia de los demandados Don Ignacio Arsuaga Rato, Don Jaime Urcelay Alonso, Don Liberto Senderos Oliva, Don Eduardo Hertfelder de Aldecoa y Doña Leonor Tamayo a la organización secreta " Yunque ".
- Se declare vinculadas a dicha organización secreta las Asociaciones " Hazte Oír ", Profesionales por la Ética ", " Organización del Bien Común " " Instituto de Política Familiar " y " Asociación de Montaña a Contracorriente ".
- Ordene la disolución de la sociedad secreta " Yunque ".
- Ordene la disolución de las Asociaciones " Hazte Oír ", " Profesionales por la Ética ", " Organización del Bien



Común ", " Instituto de política Familiar " y " Asociación de Montaña a Contracorriente ", las cuales deberán proceder a su inmediata liquidación, notificándose a los Registros Administrativos procedentes y publicar a cargo de las demandadas en portada de 5 diarios de tirada nacional un anuncio con la orden de disolución por su pertenencia a la sociedad secreta " Yunque ".

Procede resolver sobre la falta de legitimación activa que ha sido alegada por la totalidad de los codemandados, tanto personas físicas como Asociaciones.

**Segundo.-** El artículo 24.1 de la Constitución Española atribuye a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.

Ello excluye la posibilidad de instar la tutela efectiva respecto de derechos e intereses subjetivos que no se invoquen como propios, en cuanto el derecho fundamental viene referido al ejercicio de los derechos legítimos de cada litigante y no a los derechos e intereses de otro, de tal forma que, como regla, en el orden civil no cabe la acción popular que permita la defensa de los ajenos intereses.

En definitiva, el derecho de acceso a la jurisdicción, en la órbita civil, se ciñe a aquel que tiene por objeto la defensa de los propios derechos - en este sentido, SSTs 28/1996, de 29 de enero, 202/2009, de 24 de marzo, 320/2012, de 18 de mayo y 557/2012, de 1 octubre -.

En consecuencia, como regla, la legitimación para promover eficazmente un proceso solo corresponde a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo que será, en todos o en parte de sus aspectos, objeto de controversia. Así lo afirma el primer párrafo del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a cuyo tenor "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso".

No obstante, este régimen, razonablemente suficiente para la tutela de derechos e intereses subjetivos individuales, en la práctica se reveló insuficiente para la efectiva tutela de ciertos intereses dignos de protección, en los que las circunstancias de hecho concurrentes en la práctica disuadían a los afectados de acudir a los tribunales.





Por esta razón en el segundo párrafo del artículo 10 antes mencionado, como excepción a la regla general, dispone que "se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular". Lo que da lugar a los supuestos de legitimación extraordinaria, en los que es posible promover un proceso por quien no afirma ser titular de la relación jurídica controvertida.

Se trata de situaciones en las que "se habilita a determinados sujetos para formular una pretensión de manera que el órgano judicial decida sobre el fondo de una cuestión que haga posible la actuación del derecho objetivo que originariamente no corresponde a quien promueve el proceso ". Estas excepciones, en cuyo origen subyacen causas de muy distinta índole, exigen la cobertura expresa de una norma de atribución de la facultad de promover el proceso. estableciéndose, así un filtro que, de alguna manera, asegura el buen propósito de las reclamaciones formuladas así como la consistencia y representatividad de la entidad o persona actuante. De aquí que no todos puedan utilizar estas facultades legitimadora especiales y extraordinarias.

En el presente supuesto, el demandante al amparo de este párrafo 2º del art. 10 entiende que ostenta legitimación de carácter extraordinario, " en cuanto que el interés legítimo no se obtiene con la mera afirmación de actuar en defensa de la legalidad, sin concretar y probar en que han consistido las infracciones legales y en qué medida la estimación de las pretensiones le van a deparar una ventaja o evitar un perjuicio, añadiendo que ha puesto de manifiesto hechos que pueden suponer la infracción de la norma constitución del art. 22.5 de la Constitución " (sic).

Pues bien, sólo la legitimación vincula a la juzgadora para dictar una sentencia de fondo, respecto de derechos e intereses legítimos de quien acciona, sin que la Constitución atribuya el derecho a la jurisdicción para defender derechos o intereses ajenos sobre los que ninguna disposición tenga el sujeto accionante, presentándose así la legitimación como una cuestión preliminar al fondo de la controversia, en relación al derecho accionado, siendo difícil, cuando no imposible en la actual concreción legislativa, que, en el ámbito del derecho privado, donde se dilucidan derechos interpartes, puedan postularse derechos ajenos, ejercitándose una suerte de " una acción popular ".

El derecho de petición ( art. 29 de la Constitución ) se limita en su ejercicio a "la forma y con los efectos que determine la Ley". El derecho a la tutela efectiva (art. 24) se atribuye a la persona "en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos". La acción popular (art. 125) no abarca en la actualidad al proceso civil. La protección de intereses legítimos colectivos (art. 7.3º Ley Orgánica del Poder Judicial ) legitima a "las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción", pero no autoriza a



cualquiera para que se atribuya tal defensa. Las funciones que corresponden al M<sup>o</sup> Fiscal (art. 124 de la Constitución ) no está previsto se extiendan a los particulares (salvo la acción popular en el ámbito penal). El art. 11.2<sup>o</sup> de la ley Orgánica presupone la legitimación para el acogimiento de las pretensiones. El art. 19 de la anterior Ley, aunque no defina la acción, circunscribe el ejercicio de la popular "a los casos y formas establecidos en la Ley".

Por ello careciendo de derecho subjetivo alguno Don Pedro Leblic Amoros ( que actúa en este procedimiento en su propio nombre según se desprende del contenido de la demanda y del poder otorgado ante el Notario de Madrid Don Pedro Conde Martin de Hijas ) frente a los demandados tanto personas físicas Don Ignacio Arsuaga Rato, Don Jaime Urcelay Alonso, Don Liberto Senderos Oliva, Don Eduardo Hertfelder de Aldecoa y Doña Leonor Tamayo como Asociaciones " Hazte Oír ", " Profesionales por la Ética ", " Organización del Bien Común ", " Instituto de política Familiar " y " Asociación de Montaña a Contracorriente ", no pudiéndose estimar su pretensión de encontrarse amparado por el párrafo 2<sup>o</sup> del art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según se ha razonado pues no existe norma alguna que le atribuya legitimación para pedir las declaraciones de pertenencia y vinculación a una sociedad secreta y disoluciones ( de las Asociaciones ) pretendidas, no pudiendo basarse en el contenido del párrafo 2. del art. 40 de la ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación que legitima a cualquier asociado o persona legitima para " impugnar acuerdos o actuaciones de las asociaciones ", no para pedir su disolución ( sin perjuicio de que " persona legitima " no es cualquiera sino quien ostente un interés digno de protección ), ni tampoco pudiendo estimarse que, en el supuesto de la Asociación de Montaña A Contracorriente, el hecho de que haya invitado a uno de sus hijos a una excursión ( a la que según se recoge en la contestación de la demanda de la anterior no acudió ), le otorgue legitimación para pedir su disolución o la declaración de que su representante, Sra. Tamayo, se encuentre vinculada a la Asociación secreta " Yunque "; apreciando la falta de legitimación defendida por la totalidad de los codemandados, desestimo la demanda deducida.

**Tercero.-** Las costas del presente procedimiento son de preceptiva imposición al demandante de conformidad con el contenido del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación.

#### F A L L O

Apreciando la falta de legitimación activa de Don Pedro Leblic Amoros desestimo la demanda deducida por éste contra Don Ignacio Arsuaga Rato, Don Jaime Urcelay Alonso, Don Liberto Senderos Oliva, Don Eduardo Hertfelder de Aldecoa y



Doña Leonor Tamayo y Asociaciones " Hazte Oír ", Profesionales por la Ética ", " Organización del Bien Común " " Instituto de Política Familiar " y " Asociación de Montaña a Contracorriente ", imponiéndole las costas causadas.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes al de su notificación, del cual conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Se advierte a las partes que para la interposición del recurso será necesario la constitución de un depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyo trámite no se admitirá el recurso, estando exentos el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr/a. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en MADRID.